

Estudio de Caso Temático en el Eje de Seguridad Ciudadana

Presentado por el Socio Operativo:

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Asistencia técnica a Colombia

Consortio Liderado por



Socios Coordinadores



Participan más de 80 Socios Operativos y Entidades Colaboradoras de Europa y América Latina

Acción: Política Nacional de Prevención de la Delincuencia Juvenil en Colombia

El presente Estudio de Caso Temático es presentado por el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) en su rol de Socio Operativo del Programa EUROsociAL II. El OIJJ ha seleccionado, entre las diferentes actividades de trabajo que se mantienen con los países que integran el Eje Temático de Seguridad Ciudadana del Programa, la acción concreta de asistencia técnica al Gobierno de Colombia en la construcción de una Política Nacional de Prevención de la Delincuencia Juvenil, como instrumento de fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana implementada desde inicios de 2012.

Debido a la naturaleza de la demanda y a la prioridad que ha otorgado el país a esta temática, así como la amplia experiencia en materia de Prevención de la Delincuencia Juvenil en el contexto regional e internacional por parte del OIJJ, se presenta el siguiente estudio de caso como una potencial buena práctica que responde íntegramente a los objetivos de la presente convocatoria. Es importante destacar, no obstante, que esta actividad es parte de un proceso iniciado en 2012 mediante la realización de diferentes misiones y actividades a partir de las cuales las autoridades colombianas y el OIJJ establecieron la hoja de ruta y metodología de trabajo a seguir.

El proyecto de Política Nacional de Prevención de la Delincuencia Juvenil es liderado por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, y tiene como propósito reducir la delincuencia juvenil en el país en el marco de un enfoque de derechos humanos, intersectorialidad, y coordinación nación-territorio; valorando las recientes contribuciones de las evidencias científicas internacionales y las buenas prácticas nacionales en la prevención eficaz de la delincuencia juvenil. Asimismo, es importante mencionar que el presente estudio de caso ha sido concordado y validado con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP), en lo que respecta a los planteamientos de trabajo, las metodologías empleadas y las coordinaciones realizadas desde las misiones de profundización y otras actividades de asistencia técnica.

Antecedentes

Aunque la problemática vinculada a la seguridad interna en Colombia ha recibido importantes esfuerzos nacionales en los últimos años y ha sido objeto de cooperación técnica por parte de múltiples donantes internacionales, todavía la delincuencia sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los colombianos por la forma cómo ésta

afecta su calidad de vida y compromete negativamente el desarrollo socioeconómico del país. En este contexto, y en el eje de Seguridad Ciudadana del Programa EUROsociAL II, se realizaron misiones de profundización de la demanda inicial en Colombia durante el año 2012. Dentro de la demanda solicitada por el país en materia de seguridad pública, diferentes actores institucionales coincidieron en relevar la necesidad de atender de manera sistémica y articulada la problemática de la delincuencia juvenil, como una prioridad en la agenda de la seguridad interna nacional. Esta demanda se contextualiza en el marco de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana liderada por la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad Ciudadana, que constituye un esfuerzo nacional por promover la seguridad interna a través de la mejora de la convivencia al interior de las comunidades, así como elevar la calidad de los canales y mecanismos de coordinación intersectorial (y nación-territorio) entre aquellas instituciones responsables de la seguridad ciudadana en Colombia.

Desde junio de 2012, el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, en adelante OIJJ, ha venido ofreciendo una asistencia técnica continua al Gobierno Colombiano en materia de Seguridad Ciudadana como parte de su rol de socio operativo del Programa EUROsociAL II. Esta asistencia técnica ha tenido dos grandes líneas, y una de ellas es apoyar la construcción de una nueva Política Nacional de Prevención de la Delincuencia Juvenil. Para ello se realizaron, tras las misiones de profundización, actividades de coordinación y recolección de insumos a nivel nacional (en diciembre pasado) y municipal (en curso) que permitan valorar la calidad y cobertura de la oferta nacional actual de políticas, programas y servicios de prevención de la delincuencia juvenil a nivel secundario y terciario. A continuación presentaremos brevemente el contexto en el cual se da esta experiencia.

Durante la misión de profundización realizada en Colombia en junio del 2012 por el OIJJ en el marco del Programa EUROsociAL II (en el eje “La coordinación de los actores en materia de prevención de la violencia, con especial énfasis en la violencia juvenil”), el país solicitó al Programa EUROsociAL II recibir asistencia técnica para el desarrollo de una Política Nacional para la Prevención secundaria y terciaria de la Delincuencia Juvenil. Esta demanda fue aprobada por la Comisión Europea así como por la OPC del programa en septiembre de 2012 y es así que se dio continuidad a la asistencia técnica iniciada durante los meses de noviembre y diciembre del mismo año.

Esta segunda etapa de misiones tuvo como finalidad concretar el diseño del proceso de construcción de la Política Nacional de Prevención de la Delincuencia Juvenil y acompañar el primer paso consistente en la discusión conceptual sobre prevención de la violencia en la que participarían las entidades del Gobierno Nacional con competencia directa (entidades de la rama judicial) e indirecta (entidades sociales) en la materia. Este encargo

supuso, entre otras acciones, reconocer los procesos técnico-administrativos al interior de las entidades responsables de esta nueva política, así como ejecutar acciones de trabajo en terreno requeridos para atender dicha demanda. De esta forma, con el apoyo del Programa EUROsociAL II, Colombia se convierte en uno de los países pioneros de la región latinoamericana en desarrollar una Política Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil debido a la metodología establecida, al alto nivel de participación de actores públicos nacionales locales y de la sociedad civil, así como por el hecho de incorporar componente referido a la prevención secundaria y terciaria. En este trayecto, el Grupo de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha sido el punto focal para la planificación de misiones de asistencia técnica solicitadas al Programa EUROsociAL II.

La segunda misión en Colombia se dividió en dos actividades importantes. La actividad central se realizó en diciembre de 2012 con el propósito de realizar el levantamiento de información relevante sobre la oferta pública desde el nivel nacional en materia de prevención de la delincuencia juvenil. Esta información fue facilitada por las entidades gubernamentales responsables, a través de grupos focales y por medio de entrevistas en profundidad a funcionarios responsables de programas públicos de alcance nacional altamente vinculados con la prevención secundaria y terciaria de la delincuencia juvenil en el país.

Para organizar los requisitos logísticos y metodológicos de la actividad central, se sostuvieron reuniones con el Grupo de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DNP y la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho durante dos días de trabajo en noviembre de 2012, en fechas previas a la actividad central de diciembre. En dichos días se establecieron tareas (tanto para el DNP como para la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria quien lideraría técnica- y políticamente la nueva política en cuestión) y se discutieron los objetivos y estrategias para recolectar información básica consensuada que permitiera hacer un balance nacional de la oferta actual de servicios de prevención del delito. Consecuentemente, se ha podido perfilar los lineamientos de política nacional para la prevención de la delincuencia juvenil con un enfoque integral, intersectorial, multinivel y de promoción del desarrollo juvenil y la seguridad ciudadana.

En ese sentido, se estableció la realización de dos grupos focales con todos los representantes de las instituciones que ofrecen programas vinculados a la prevención de la violencia y la promoción del desarrollo juvenil. Los grupos focales se realizaron durante todo el día en la ciudad de Bogotá, y fueron moderados por el experto del Programa EUROsociAL II. Los dos días restantes de la misión de diciembre fueron destinados a la

realización de las entrevistas previstas a los funcionarios públicos directamente implicados en programas de prevención de la delincuencia juvenil desde el nivel central. Estas entrevistas también serían realizadas por el experto del Programa. Los instrumentos de los grupos focales y de las entrevistas fueron propuestos por el experto del Programa.

El primer grupo focal de interés estuvo compuesto por representantes de entidades del sector de Justicia con la finalidad de conocer la oferta establecida alrededor de la ruta judicial del adolescente infractor en Colombia (correspondiente a prevención terciaria), mientras que el segundo grupo focal de interés estuvo integrado por representantes de entidades del sector social quienes tienen a su cargo la oferta de prevención primaria y secundaria. Los resultados dejaron entrever una alta heterogeneidad de concepciones relativas a la prevención, y plasmadas en el tipo de intervención a realizar, en los enfoques variados que orientan sus programas (punitivos en el caso del sector Justicia) y las estrategias dispersas utilizadas para sus fines misionales (en el caso de entidades del sector social). Es destacable el fuerte impacto (aunque no en todos por igual) que los programas aplicados desde el sector social vienen consiguiendo, aunque no existe una medida que evidencie de forma objetiva dichos logros en todos los sectores. Las estimaciones económicas o el presupuesto ejecutado de la oferta nacional implementada no han podido ser reconocibles aunque fueron solicitadas a todos los participantes para que sean enviadas por ellos mismos al experto al término de la misión de diciembre.

Asimismo, todas las entrevistas realizadas a los stakeholders previstos coincidieron en señalar la necesidad de desarrollar una política integral que vaya desde la prevención primaria hasta la terciaria, basada en evidencias científicas y en un enfoque intersectorial, para prevenir la delincuencia juvenil en Colombia. El estado de la oferta nacional disponible (políticas, programas y proyectos) de todos los sectores implicados deja en claro la alta heterogeneidad de concepciones (algunas punitivas) sobre la prevención de la violencia juvenil en el país, y con ello, las disparidad de intervenciones identificadas.

En el mismo sentido, todos los entrevistados fueron consistentes en declarar la ausencia de una estrategia de coordinación intersectorial que evite duplicar esfuerzos y que coordine mejor con el nivel territorial en todas las acciones de prevención, tanto desde la prevención primaria hasta la terciaria, para lograr resultados concretos en el terreno. También señalaron la imposibilidad de trabajar en conjunto debido a los celos y reservas institucionales en cada sector, según declararon, así como la ausencia de un liderazgo político para la conducción de este tema, según se indicó durante esta actividad.

Se mencionaron en todas las entrevistas la presencia de importantes aportes de la Cooperación Internacional para el desarrollo de proyectos en temas altamente vinculados a la prevención de la delincuencia así como a la promoción del desarrollo juvenil y

adolescente. Sin embargo, se mencionó que no existía desde la misma Cooperación Internacional en Colombia un factor de orden que organice la estrategia de la cooperación en la materia frente a todos los sectores, y con ello se evite la construcción de una “torre de babel” con diferentes lógicas de actuación frente al concepto de prevención, y se articulen sinérgicamente los esfuerzos sectoriales que la misma cooperación patrocina.

Otra de las grandes debilidades que todos los entrevistados señalaron fue la ausencia de un sistema de georeferenciación de la delincuencia juvenil en Colombia, a efectos de implementar planes de acción para su reducción que atiendan los escenarios concretos donde ésta se produce. Asimismo, se destacó la necesidad de que se disponga de forma georeferenciada la oferta especializada que brinda cada sector implicado en todo momento, y se rindan cuentas de forma periódica de cómo esta delincuencia (su nivel) va reduciéndose o no, en los territorios afectados por la misma, a partir del trabajo desplegado por parte de los responsables institucionales de la oferta de prevención.

Otro de los grandes impedimentos para una política nacional de prevención de la delincuencia juvenil que todos los entrevistados señalaron como una condición elemental para que ésta se pueda implementar eficazmente, es resolver los vacíos legales y las circunstancias institucionales que generan mandatos misionales no cumplidos en la legislación. Se acentuó la ausencia de un código de procedimientos penales en materia de justicia juvenil, y del manual de mediación a cargo de instituciones del Sistema de Justicia que tienen el mandato de producirlas, que hasta la fecha de conocimiento (diciembre de 2012) no ha sido elaborado. En el mismo sentido, la ausencia de una regulación jurídica de la Justicia Restaurativa que ha estado muy presente en el discurso, todavía está ausente en los procedimientos de mecanismos alternativos a la judicialización de casos.

Todos los entrevistados fueron consistentes en señalar que la implementación de esta política exige previamente un diseño altamente participativo y consensuado entre todos los sectores implicados en el tema, y donde no solo se revisen las experiencias nacionales de prevención de la delincuencia juvenil que han tenido éxito desde el nivel nacional hasta el nivel local, sino también las experiencias internacionales que se han desarrollado en el ámbito europeo y latinoamericano. En ese sentido, todos los entrevistados (así como los participantes de los grupos focales) estuvieron de acuerdo en la necesidad de tomar parte en un taller de trabajo para conocer, debatir y contrastar el estado actual de la oferta nacional con respecto al resto de países en prevención de la delincuencia juvenil, y que este ejercicio sea un insumo para el diseño de esta nueva política nacional de prevención.

Luego de las coordinaciones de trabajo sostenidas entre el OIJJ con el DNP entre enero y marzo del presente año, se llegó al acuerdo de que este taller de trabajo propuesto en diciembre tenga el formato metodológico de un Foro Internacional de Buenas Prácticas en

Prevención de la Delincuencia Juvenil, y que sería desarrollado los días 29 y 30 de abril del 2013. La finalidad específica del mencionado encuentro internacional será:

1. Fortalecer la capacidad institucional de la administración pública colombiana en la construcción de la Política Nacional de Prevención de Delincuencia Juvenil basada en las buenas prácticas internacionales, regionales y nacionales, y en las evidencias científicas acerca de aquello que funciona eficazmente para prevenir la delincuencia juvenil.
2. Analizar la problemática de la delincuencia juvenil a nivel colombiano en términos de la cobertura y calidad de la oferta institucional disponible a nivel nacional en prevención de la delincuencia juvenil, así como de las experiencias exitosas desarrolladas en el país.
3. Socializar y analizar las diferentes problemáticas de la delincuencia juvenil y la respuesta institucional eficaz de las administraciones públicas responsables de su abordaje, a nivel europeo y latinoamericano, y reflexionar sobre su adaptabilidad a la realidad colombiana.
4. Concienciar a los actores responsables de la necesidad de un trabajo conjunto, analítico, planificado y de alta coordinación intersectorial en la prevención de la delincuencia juvenil.
5. Intercambiar y reforzar el aprendizaje continuo entre países de América Latina y Europa.

Preguntas de reflexión

Un resultado importante de la metodología de estudio de casos que viene realizando el Programa EUROsociAL II, es el de reunir elementos objetivos que demuestren el impacto del Programa en el fortalecimiento de una Política Pública. Con el fin de extraer aprendizajes sobre nuevas fórmulas de cooperación técnica que favorezcan el protagonismo y el compromiso de las administraciones públicas latinoamericanas participantes y el intercambio de conocimientos en materia de políticas públicas eficaces que favorezcan la cohesión social entre países de la región (cooperación sur-sur) es

fundamental sistematizar y reflexionar y monitorear la asistencia técnica que se viene ofreciendo. A la vez, esto será crucial para orientar la marcha de ejecución futura del Programa y la mejora de la asistencia técnica ofrecida a los países de la región en el marco de la cooperación Unión Europea y América Latina. En ese sentido, las preguntas de reflexión que serán desarrolladas pretenden explicar y reflexionar sobre la marcha de la acción concreta que este estudio de caso presenta, y de este modo enfocar aquellos elementos que se consideran destacables.

Para ello, es necesario precisar algunos puntos centrales a modo de balance de todo lo implementado sobre la acción hasta este momento. Por lo que, una vez se ha ofrecido una visión general del contexto del país donde se describen las actividades de asistencia técnica desarrolladas por el OIJJ hasta el momento, se señala:

1. El Gobierno Colombiano se encuentra implementando desde inicios del año 2012, una Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta política viene siendo asistida técnicamente por el socio operativo en dos líneas: i. una primera a nivel municipal, que tiene por finalidad la implementación de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana al contexto local y por tanto a diversas municipalidades del país, ii. y una segunda línea cuyo objetivo es desarrollar una Política Nacional de Prevención de la delincuencia juvenil. Al respecto es importante indicar que Colombia no se encuentra inmerso en ningún proceso de reforma política, aunque sí de implementación (Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), y que ambas líneas de trabajo vienen siendo acompañadas por la Agencia Presidencial de Colombia en tanto socio coordinador como por el OIJJ como socio ejecutor de la acción en el marco del Programa EUROsociAL II.
2. En lo que respecta al impacto esperado en la mejora de la cohesión social cabe destacar que la política foco del presente estudio de caso tiene un fuerte componente de integración e inserción social de jóvenes en situación de exclusión social y conflicto con la ley penal así como de los servicios públicos competentes en protección y atención sus demandas como población en riesgo. La hipótesis de trabajo que subyace al concepto de una política nacional de prevención de la delincuencia juvenil es incrementar la cohesión social a través de los resultados de la prevención secundaria y terciaria de la delincuencia juvenil, especialmente en un grupo poblacional particularmente sensible como es el de los adolescentes y jóvenes colombianos (franja etaria de interés: 14 a 26 años de edad según la Ley).

3. El resultado previsto a través de la planificación y el marco general de resultados de EUROsociAL II es el diseño de un primer borrador de Política Nacional de Prevención de la Delincuencia Juvenil hacia finales del presente año, como parte del plan anual de actividades del eje. Posteriormente se ha previsto como parte de una segunda fase prevista desarrollar durante el siguiente año 2014, y en natural acuerdo con el Gobierno Colombiano, realizar una aplicación piloto de la política nacional en cuestión en seis municipios seleccionados bajo un “diseño antes y después” que permita evaluar la política al cabo de 8 meses de implementación. Esto permitirá verificar si la oferta nacional y local replanteada (introducción de mejoras en planificación, coordinación, gestión y evaluación de la oferta; incorporación de buenas prácticas adaptadas, focalización de poblaciones meta específicas) en los municipios seleccionados, serán lo suficientemente completos e integrales como para lograr índices de reducción de la delincuencia juvenil y de esto modo atribuir sus efectos de reducción del delito juvenil a la política que vendrá siendo testeada, de manera que pueda obtenerse una validación empírica de la eficacia de dicha política antes de ser llevada a escala nacional. Para ello se ha previsto la realización de una línea de base en cada municipio seleccionado como parte de la asistencia técnica de carácter metodológico (en evaluación de procesos, resultados e impactos). El resultado final o el impacto de la política nacional sería la reducción de la delincuencia juvenil en Colombia al cabo de un horizonte temporal aún por definir por parte de las autoridades colombianas (Ministerio de Justicia y del Derecho).
4. Con relación a la justificación de que si efectivamente el presente estudio de caso constituye potencialmente una buena práctica en el marco del programa, el OIJ considera que sí al introducir una metodología central en el diseño de evaluación de las políticas públicas. Por un lado, el OIJ tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de asistencia técnica en diferentes regiones del globo, destinada a Estados de la región de América latina y Europa fundamentalmente , en materia de prevención de la delincuencia juvenil en sus diferentes niveles; desde una perspectiva multidisciplinar del fenómeno, en el marco de un enfoque de la protección de los derechos humanos de los adolescentes y los jóvenes, y sobre el soporte de las evidencias científicas disponibles, tanto en la literatura internacional especializada como en las buenas prácticas evaluadas existentes en el resto de las regiones del mundo, en esta misma materia.

5. El OIJJ entiende que analizar la presente experiencia de asistencia técnica en Colombia ofrece importantes lecciones aprendidas que puedan servir como trabajo referencial para países de la región de América Latina y Central que decidan emprender leyes con el mismo fin, dentro o fuera del marco de la cooperación del Programa, al emplear tanto el concepto de desarrollo de políticas públicas basadas en evidencias (en este caso, evidencias sobre aquello que funciona para prevenir eficazmente la delincuencia juvenil) bajo criterios de adaptación y análisis de su aplicabilidad al contexto nacional colombiano, así como al hacer uso de la metodología del Profesor Eugene Bardach de la Escuela Goldman de Política Pública de la Universidad de California en Berkeley en Estados Unidos, para analizar y desarrollar racionalmente políticas públicas, empleando el método “*el camino de los ocho pasos*”. Utilizando este método como una hoja de ruta técnica, la nueva política podrá disponer desde elementos de previsibilidad de eficacia basados en evidencias y buenas prácticas, hasta elementos de monitoreo y evaluación de sus resultados e impactos bajo un enfoque de rendición de cuentas e intersectorial, donde cada sector garantice el logro de sus propias metas.

Sobre la base de lo anterior, el presente estudio de caso articula las siguientes preguntas:

¿Se planteó inicialmente bien la acción, vinculándola a un proceso de reforma de política estratégico en el país?

Aunque no se trató de un proceso de reforma, sino de implementación de un componente dirigido a la prevención de la delincuencia juvenil en el marco de una política nacional de seguridad y orden interno, el OIJJ planteó la acción materia del presente estudio de caso, vinculada a la política nacional de seguridad interna de carácter estratégico al ser liderado desde la propia Presidencia de la República. Atender el concepto de aquello que significa en términos políticos o técnicos “plantear bien” puede resultar controversial, por lo que el presente estudio prefiere destacar que desde el eje a cargo del socio operativo, se trató por todos los medios de interpretar y canalizar lo mejor posible la demanda solicitada por el país, antes que sugerir o direccionar la acción.

¿La estrategia de intervención diseñada fue la correcta para atender la demanda del país?

Como se desarrollará más adelante en la sección de análisis del presente documento, se optó por una estrategia racional de desarrollo de la acción: Política Nacional de Prevención de la Delincuencia Juvenil, caracterizada por el uso de las evidencias científicas disponibles en la materia (en el concepto de Políticas Públicas basadas en evidencias), sin detrimento de enriquecerla con otras prácticas y enfoques propios de la seguridad,

convivencia ciudadana o los derechos humanos. Así como el empleo del método de los “ocho pasos” antes mencionado, para el diseño de una hoja de ruta técnica por etapas, para los procesos de construcción de dicha acción, con un alto contenido participativo por parte de las autoridades nacionales, los beneficiarios de tales políticas (grupos focales en adolescentes y jóvenes potenciales beneficiarios de esta nueva política) y los responsables locales de dicha oferta institucional en prevención secundaria y terciaria de la delincuencia juvenil.

¿Es posible lograr resultados a medio plazo?

Podemos señalar que algunos resultados a mediano plazo están vinculados a la disposición de informes de balance de la oferta nacional y municipal que serán importantes insumos para el desarrollo de la acción (política nacional de prevención de la delincuencia juvenil). Se trata de productos intermedios, en el marco de la cadena de resultados y de impactos (que en la guía de elaboración de estudios de casos temáticos se señalan) que son parte del proceso de acompañamiento que el OIJJ ofrece a las diferentes autoridades públicas del Gobierno Colombiano implicadas a través de la asistencia técnica del 2012 y las previstas para este año 2013 y su continuidad en 2014.

¿Qué está funcionando bien y por qué?

La alta implicación de las autoridades colombianas, tanto del Ministerio de Justicia como del DNP, han sido determinantes para que la implementación de la acción pueda alcanzar los objetivos previstos, y especialmente, la dimensión actual, así como la labor de acompañamiento de la Agencia . Durante el presente mes, en el país se desarrollará un Foro Nacional de Buenas Prácticas en Prevención de la Delincuencia Juvenil desarrollado íntegramente por las autoridades colombianas, cuyos resultados serán un importante insumo para el contenido de la acción que este estudio de caso presenta. Se han empleado metodologías participativas y otras de análisis de información y datos de carácter cualitativo y cuantitativo, así como criterios de calidad sobre dichas intervenciones, a efectos de que puedan ser seleccionadas con cierta valoración técnica, y posteriormente socializadas y discutidas en el mencionado foro. En el mismo sentido, se ha previsto realizar un Foro Internacional de Buenas Prácticas en Prevención de la Delincuencia Juvenil con la finalidad que persigue el foro nacional antes descrito frente a la acción, con apoyo del Programa EUROsociAL II, así como con el apoyo técnico e institucional del resto de autoridades del Gobierno del sistema de la seguridad interna en materia juvenil, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Agencia de Cooperación Internacional Alemana.

Este Foro Internacional se constituye también en un encuentro de intercambio de conocimientos y experiencias que el Programa EUROsociAL II por su naturaleza, promueve. Las administraciones públicas de países de Europa y de América Latina participarán hacia fines del presente mes para compartir sus aprendizajes y lecciones obtenidas tras varios años de trabajo en la prevención de la delincuencia juvenil en sus respectivos contextos nacionales y locales. Se pretende que aquello que resulte de tal encuentro, pueda servir de un insumo relevante, toda vez que en su gran mayoría son prácticas basadas en evidencias científicas, evaluaciones sistemáticas e intervenciones sostenidas en modelos avanzados sobre el cambio de comportamiento delictual en jóvenes, cuyas evaluaciones de impacto han demostrado la reducción del crimen juvenil en aquellos contextos donde fueron implementadas y en colaboración con otros actores estratégicos tal y como el eje de articulación de actores e intersectorialidad que el programa promueve.

Asimismo, se ha previsto desarrollar una herramienta metodológica de carácter autodidacta (*Previniendo la delincuencia juvenil en América Latina a través de políticas públicas basadas en evidencias: una guía para la acción eficaz*) que contemple los pasos elementales a seguir para la elaboración, seguimientos y evaluación de intervenciones institucionales en el ámbito local y nacional, donde las experiencias nacionales e internacionales compartidas en ambos foros mencionados, puedan servir de ejemplos de cómo se pueden visualizar dichas políticas y programas de prevención del nivel secundario y terciario. De este modo, el resultado del Foro puede alcanzar un impacto mayor al no ser una mera sistematización de dicho encuentro, si no que por el contrario, tenga un alcance mayor al poder llegar a otros países que deseen seguir el camino de Colombia en la implementación de la metodología racional de los ocho pasos y el enfoque de evidencias, en el diseño de ofertas institucionales del nivel secundario y terciario en prevención.

Es importante destacar finalmente que como producto del trabajo realizado con autoridades nacionales durante la misión de diciembre de 2012, se desarrollaron unas directrices de política para la prevención de la delincuencia juvenil. Estas directrices han constituido un marco técnico orientador en enfoques, metodologías, herramientas y estrategias para el contenido de la política nacional, que en estos momentos se encuentra en fase de recopilación de insumos siguiendo el método de los ocho pasos de Bardach.

¿Qué puede funcionar mejor?

Definitivamente resulta de especial interés mencionar algunas cuestiones de mejora que en el proceso son posibles de identificar. El Ministerio de Justicia de Colombia, quien lidera la construcción y posterior implementación de la presente política materia del presente estudio de caso, ha previsto fortalecer su equipo técnico a través de la

contratación de consultores nacionales que colaboren técnicamente con el desarrollo de la acción. Desde hace dos meses estos consultores están encargados de desarrollar insumos de carácter nacionales y recopilar información analítica en el contexto nacional.

El año pasado no se disponía de esta importante contribución desde el staff permanente del Ministerio. Fue así que como parte de las misiones de noviembre y diciembre del año pasado, se ofrecieron sugerencias al respecto y éstas fueron recogidas. Sin embargo, desde el Programa EUROsociAL II no se ha podido mejorar la propia contribución interna a través del trabajo desarrollado en otros ejes. Por ejemplo, en la presente acción, un foco central para prevenir el crimen juvenil es favorecer los procesos de re-escolarización de adolescentes y jóvenes (Eje de Educación de GIZ) y mejorar los procesos de cuidado y protección (Eje de Protección Social ILLO). Desde nuestra perspectiva como socio operativo consideramos que sería altamente conveniente que exista una mayor coordinación temática sobre los resultados y aportes de los ejes a cargo de otros socios operativos, cuyo trabajo podría fortalecer enormemente este proceso.

¿Cómo se están visibilizando los hitos más importantes y los productos que se van consiguiendo en el marco de la acción?

Entre las actividades de difusión se ha previsto desarrollar un boletín electrónico sobre los avances de la acción en el país, así como elaborar notas de prensa e información valiosa con relación a noticias, eventos, actividades, formaciones y otras acciones de interés que puedan resultar útiles para el desarrollo de la presente acción. Aspira a ser un medio para la expresión y el intercambio participativo de los actores involucrados, invitando a los actores públicos que lideran este proceso, a que desarrollen artículos breves sobre sus impresiones y comentarios sobre el desarrollo de la acción.

¿Hay complementariedad con algún iniciativa/proyecto de la cooperación europea o bilateral?

El eje de Seguridad Ciudadana desarrolla actividades en materia de seguridad y prevención de violencia en países de la región de América Central como El Salvador, Panamá, así como en otros de la región como Méjico, Ecuador, Uruguay, etc. Entre los países destinatarios de la cooperación que el programa EUROsociAL II ofrece son varios los países que han manifestado su interés en el desarrollo de asistencias técnicas destinadas al desarrollo de instrumentos políticos que favorezcan a la disminución de la violencia y delincuencia juvenil. Es por tanto este un punto de partida que pueda servir como referencia y aprendizaje en la planificación y ejecución de actividades futuras. De igual forma en el marco de dichas actividades tanto el OIJJ como FEI (socio coordinador) y EFUS (socio operativo) han establecido coordinación y conocimiento del resto de iniciativas

mantenidas en materia de prevención y seguridad ciudadana entre los que se encuentran programas específicos en materia de prevención, como el programa Projóvenes de la UE y otros liderados por la GIZ, AECID, UNDP, USAID, BM, BID, en tanto como donantes y actores relevantes en la temática. Por otro lado y de manera expresa se ha establecido una comunicación y sinergia con el organismo SICA y la Estrategia de Seguridad Centroamericana mediante la participación de personal del SICA en diferentes misiones y actividades del programa.

¿Cómo se están comunicando los resultados que va obteniendo EUROsociAL a los destinatarios (directos e indirectos)?

Aunque con los destinatarios finales de la presente acción no se ha empezado aún un proceso de comunicación de resultados, sí se ha hecho lo propio con los destinatarios indirectos, concretamente, las administraciones municipales y la nacional, a través de reuniones de trabajo, entrevistas y de grupos focales durante las misiones desarrolladas.

¿Qué se espera que suceda en los próximos dos años?

Se espera que el país pueda validar a nivel municipal la presente acción en cuestión, que luego de validarla empíricamente pueda realizar las adaptaciones necesarias para llevarla al resto de contextos locales, y posteriormente a escala nacional y que al cabo de un horizonte temporal razonable medio-largo plazo puedan evidenciarse los primeros efectos de la eficacia de esta nueva política nacional de prevención de la delincuencia juvenil.

¿Dónde se estima que estará el proceso de política pública en marcha?

Se ejecutará a nivel nacional luego de cumplir con las fases de diseño, construcción y validación correspondientes y previstas, y será liderada desde un marco intersectorial, por el Ministerio de Justicia de Colombia. El DNP contribuirá sustancialmente en este proceso a través del soporte metodológico del SIS-CONPES para el diseño de la política.

¿En qué habrá podido contribuir/que habrá podido aportar EUROsociAL?

Sobre esta experiencia en concreto, el Programa EUROsociAL II será capaz de dejar instalada una metodología racional y participativa para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencias y el empleo de una hoja de ruta técnica basada en los ocho pasos propuestos por el Dr. Bardach para el análisis y diseño de políticas públicas efectivas. En la región Latinoamericana es aún novedoso el concepto de hacer política sobre la lógica de una planificación racional y el uso de las evidencias científicas sobre qué funciona de forma demostrada para atender y revertir los factores causales de determinados

problemas. En particular, en el campo de la prevención de la delincuencia juvenil, la región cuenta con experiencias que van desde prácticas improvisadas y basadas íntegramente en el discurso y la buena voluntad de los actores (la mayoría), hasta algunas de menor diseminación y de menor número de experiencias realizadas, pero basadas en enfoques científicos, capacidad demostrada de alterar las variables causales del crimen juvenil y por tanto poseer una alta previsibilidad de resultados y de impactos.

En concreto, el Programa dejará un importante bagaje técnico, metodológico y conceptual procedente de la experiencia de administraciones públicas europeas y latinoamericanas participantes con el fin de que las administraciones públicas desarrollen este tipo de experiencias, y ello pueda de alguna forma ser evidenciado en la experiencia de Colombia, que en este momento se está prestando como un interesante laboratorio social para el desarrollo de esta acción, y con un factor crítico que ha sido determinante para que lo primero se logre: motivación de los actores e implicación política de las autoridades de gobierno en el alto nivel.

Análisis

A continuación ofreceremos una breve contextualización de la metodología de los ocho pasos de Bardach para complementar el presente análisis siguiendo el enfoque prospectivo planteado en la sección anterior con relación a las preguntas contestadas. Los pasos para el análisis y desarrollo de políticas sugeridos por Bardach son los siguientes:

1. Definición del problema.
2. Obtención de información.
3. Construcción de alternativas.
4. Selección de criterios.
5. Proyección de los resultados.
6. Confrontación de costos y beneficios.
7. Decisión.
8. Contar la historia.

A continuación desarrollaremos los ocho pasos a la vez que iremos respondiendo a algunas preguntas de reflexión de la guía de estudio de caso según el avance de la acción:

1. Definición del problema. El problema es una razón para hacer todo el trabajo y da sentido de dirección para obtener evidencias de información. Al plantear el problema, es

recomendable delimitarlo de tal manera que pueda ser investigado en sus variables específicas, que permiten localizar problemas significativos del entorno que pueden referirse a situaciones no sólo del pasado, sino que tiendan a prevenir el futuro inmediato. La definición debe ser evaluativa, de manera que es útil examinar la situación particular con ayuda de herramientas que nos proporcionen la visión de las fallas en términos cuantitativos. Resulta útil hacer el diagnóstico de las supuestas causas de los problemas, ya que ello brindará elementos para definir criterios y seleccionar categorías y variables. Al plantear un problema, se recomienda evitar definir la solución dentro del problema, definir los términos involucrados operacionalmente para evitar ambigüedades, delimitar su nivel: descripción, causal, predicción o pronóstico, toma de decisiones, etc., señalar con precisión la población, lo que se pretende analizar y las condiciones en las que se presenta. La definición del problema es un paso crucial, al que se retorna en los demás pasos. En el curso del trabajo analítico, el entendimiento empírico y conceptual que tenga del problema, permitirá que la definición de éste vaya evolucionando.

- a) Proceso de profundización de la demanda: un ejercicio que se trató de realizar durante las misiones con relación a este primer paso en la metodología de Bardach fue identificar cuál era el problema y sus factores causales. En ese sentido, además de las entrevistas con los informantes durante tales misiones, se revisaron documentos diagnósticos sobre la delincuencia juvenil en Colombia y se analizaron sus causas en el marco del conjunto de la política nacional de seguridad.
- b) El planteamiento del problema estaba fuertemente vinculado a la calidad y cobertura de la oferta nacional de servicios de prevención de la delincuencia juvenil en el país, según los informantes y los documentos revisados. La política que se viene construyendo está dirigida a revertir los efectos de los factores causales identificados que producen la delincuencia juvenil en el país. Se está previendo que las estrategias que se piensan revisar y seleccionar tengan una fuerte implicancia demostrada o potencial de afectar tales factores, y con ello reducir la tasa de delincuencia juvenil desde aquello que la produce.

2. Obtención de información. Una vez planteado el problema, con sus variables, categorías e indicadores, se lleva a cabo la recopilación de datos. La clave es tratar de obtener únicamente aquellos datos que puedan convertirse en conocimientos que a su vez puedan convertirse en información que tenga que ver con el problema definido. Las condiciones en las que se realiza el análisis de políticas, rara vez nos permite el tiempo necesario para llevar a cabo una investigación académicamente rigurosa. La información que proporcionan los datos es necesaria para tres propósitos principales: (1) evaluar la naturaleza y la extensión de los problemas; (2) evaluar las características particulares de la

situación concreta y (3) evaluar las políticas que por lo menos algunas personas han pensado que funcionarían bien en situaciones aparentemente similares. El valor de la información radica en el marco analítico de la decisión y depende de la posibilidad de que dicha información permita sustituir con una decisión mejor cualquier otra decisión que se haya tomado sin ella; la magnitud se relaciona con la diferencia entre el valor del resultado probablemente mejorado ante la nueva decisión y el valor del resultado original. Hay una alta probabilidad de que el problema no sea único por lo que hay que rastrear algunas de las soluciones para identificar rutas, lo que nos lleva a localizar información que se constituye en un marco referencial o conceptual. Con relación a lo anterior, y sobre la marcha de lo andado en esta actividad podemos mencionar:

- a) Para este paso se previó la realización de grupos focales y entrevistas en profundidad con las autoridades nacionales (diciembre 2012) y municipales (abril – junio 2013) responsables de los servicios de prevención secundaria y terciaria de la delincuencia juvenil con el objetivo de valorar cualitativamente la oferta disponible en la actualidad según los criterios de calidad, cobertura, eficacia y eficiencia.
- b) También se previó analizar los presupuestos implicados, así como los instrumentos de coordinación y gestión existentes en una misma institución y en el espectro de la coordinación intersectorial. Desafortunadamente esta información no fue enviada cuando fue solicitada por lo que no se pudo realizar alguna estimación de costo-beneficio de la política actual, así como valorar su calidad de gasto.
- c) Con relación a información cuantitativa que permita dimensionar la problemática y su extensión en el país y en los escenarios locales de interés, las consultoras de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho se encuentran recopilando importante información estadística, así como diagnósticos e informes nacionales de especial interés al respecto.
- d) Como parte de un análisis aún parcial de los datos y de la información revisada hasta este momento, se ha identificado que es de crucial interés para el buen desarrollo de la presente política, incorporar desde un carácter intersectorial, las políticas públicas nacionales colombianas de:
 - a. Convivencia y prevención de la violencia escolar a cargo del Ministerio de Educación. Asimismo, las acciones vinculadas a la prevención de la deserción escolar y los esfuerzos que pretenden fomentar programas de reescolarización y de educación alternativa a la modalidad escolarizada.
 - b. Prevención del consumo de drogas a cargo del Ministerio de Protección Social.

c. Fortalecimiento de la familia a cargo del Ministerio de Protección Social.

3. Construcción de alternativas. A partir de los datos obtenidos, un análisis estadístico ya sea descriptivo o inferencial según el caso, junto con un enfoque intuitivo y cualitativo, ha de conducir a la construcción de alternativas de solución al problema, para lo que es recomendable iniciar con una visión general para que en etapas siguientes ir delimitando. En una primera aproximación al problema, se incluye la alternativa, a manera de hipótesis de nulidad, de no emprender ninguna acción; dejar que las tendencias sigan su curso, para después ir refinando la hipótesis y precisar proposiciones específicas. Para la construcción de alternativas, es recomendable revisar las fuentes más comunes del cambio natural en el ambiente de políticas públicas, como los cambios políticos después de una elección, los cambios en los niveles de desempleo y en las tasas de inflación, la variación entre estrechez y holgura en los cambios demográficos (al respecto resulta crucial que esta nueva política contemple los efectos subutilizados del bono demográfico en Colombia).

Para construir las alternativas se requiere analizar las causas del problema para después reducir y simplificar la lista de alternativas de solución. La clave es distinguir entre una alternativa básica y sus variantes.

- a) Con relación a este paso se decidió por la alternativa más vinculada al enfoque de asistencia técnica del OIJ que tiene que ver con el empleo de las evidencias científicas para el desarrollo de contenidos de políticas de prevención de la delincuencia juvenil. Una acción que se desprende directamente de ello es la realización del Foro Internacional hacia fines de abril de 2013, así como la coordinación con el resto de entidades de la cooperación internacional en la materia (como la Agencia de Cooperación Internacional Alemana en Colombia).
- b) Los resultados hasta el momento con relación a este paso consisten básicamente en haber realizado las coordinaciones con administraciones públicas de algunos países europeos y latinoamericanos para que compartan sus experiencias de buenas prácticas durante dicho Foro y esto resulte un insumo para la política. De la misma forma, se ha desarrollado un dossier de buenas prácticas basadas en evidencias para darle contenido a las estrategias contenidas en la nueva política.

Los siguientes pasos aún están por ser dados durante este año, por lo que solamente los definiremos y no ejemplificaremos, a fin de no extendernos con esta presentación.

4. Selección de criterios. Una vez propuestas las alternativas de solución del problema o cursos de acción específicos, se propone la selección de criterios que servirán de base para la elección de la alternativa a aplicar. Para el argumento de cualquier política es útil imaginar que se tienen dos líneas discursivas interconectadas pero separables, la analítica

y la evaluativa. La primera es todo lo referente a los hechos y proyecciones imparciales de las consecuencias, mientras que la segunda es todo lo relativo a los juicios de valor.

El criterio más importante es que el resultado proyectado resuelva el problema de política en un grado aceptable. Un criterio puede ser el de eficiencia, que puede referirse a la utilidad desde la perspectiva que tienen los ciudadanos de su propio bienestar. Otro criterio es el de equidad, igualdad, justicia, libertad, etc. Para ponderar los criterios para la evaluación de los conflictos, uno de los enfoques consiste en dejar que los procesos gubernamentales y políticos efectúen la ponderación o bien, que el analista modifique por sí mismo la ponderación. Algunos criterios prácticos a considerar se relacionan con la legalidad, la aceptabilidad política, la solidez y la perfectibilidad. Es posible tener como criterio los modelos de optimización relacionados con la programación lineal y la investigación de operaciones.

5. Proyección de los resultados. Una vez aplicados los criterios a las alternativas, se seleccionan las que se consideren más factibles. La aplicación de dichas alternativas o nuevas políticas, se constituyen en un proyecto para ser aplicado en la resolución, modificación o transformación de las condiciones en las que se inició el análisis.

Este es el paso más difícil porque implica la resolución y la decisión con visos de futuro. Elaborar una política impone una carga moral, ya que afecta a gente, por lo que es recomendable tomar las precauciones necesarias y considerar los márgenes de aleatoriedad posibles. La proyección depende de la comprensión de las relaciones causa – efecto. Casi siempre resulta útil contar con un modelo de la estructura causal (por ejemplo, en una política de reintegración de exconvictos, se pretenderá disponer antes de la propuesta de política, de un modelo causal que permita comprender objetivamente la reintegración social del delincuente con datos empíricos y teorías explicativas subyacentes al problema de interés), para lo que es posible dividir el postulado original del problema en problemas independientes y modelarlos por separado. Otros modelos de proyección pueden ser los de mercado, los de producción, los de investigación de operaciones, etc.

Para la proyección de los resultados muchas veces se requiere pensar tanto en la dirección del resultado como en su magnitud. Es conveniente empezar por formular un escenario, tanto el adverso como el óptimo. Se tendrían que prever los posibles resultados desde la perspectiva del otro, los efectos secundarios no deseados, los costos éticos, etc. Una manera conveniente de resaltar lo más relevante de la información es presentarla en una matriz de resultados, cuya versión corta puede incorporarse al reporte final.

6. Confrontación de costos y beneficios. Por lo general, desde que se inicia la proyección se tienen que confrontar costos y beneficios de los resultados asociados a distintas opciones

de política para satisfacer al cliente o al público. La transacción más común se da entre dinero y un bien o servicio que recibe alguna proporción de la población. Otra se refiere a políticas reguladoras, y otra más a la ponderación de costos, la que se complica por el llamado “problema de la atribución múltiple”, o sea, el hecho de que la alternativa de no solución sea predominante, al mismo tiempo que los criterios evaluativos de las diferentes opiniones no son fácilmente medibles. Es preferible expresar las ponderaciones en términos de magnitud y dirección, trabajándose los mínimos aceptables. Para la ponderación, en ocasiones es conveniente aplicar la intuición. Otra aplicación útil del análisis del mínimo aceptable o punto de inflexión, concierne a la incertidumbre acerca del futuro.

7. Decisión. En este paso se verifica cuán bien se ha realizado el trabajo hasta este momento. Ya se seleccionaron las políticas y se cuenta con un proyecto para aplicarlas, por lo que aun cuando no se sea el directamente responsable de la toma de decisión, en este punto se pretende que sí se tiene la responsabilidad de decidir qué hacer para desarrollar el proyecto, del cual, el analista de política debe estar convencido.

8. Contar la historia. Después de redefinir el problema reconceptualizar las alternativas, reconsiderar los criterios y reevaluar las proyecciones, hay que difundir los resultados del análisis, con la suposición de que existe la posibilidad de que alguien quiera basar una decisión real o una propuesta de política en dicho análisis. En este momento, se debe ser capaz de contar la historia básica en términos sencillos y realistas como para que cualquier persona sea capaz de seguir adelante con la tarea, aún cuando nosotros no estemos.

La historia puede comentarse oralmente o por escrito. La recomendación es que entre dos cosas iguales, la más corta suele ser mejor. Es recomendable el uso de los medios para la presentación. La historia debe tener estilo narrativo, fluido y lógico, no necesariamente incursionando en los 8 pasos, que son una guía para el análisis, pero no para la comunicación, y sólo destacar lo relevante y matizado. Es de importancia cuidar la redacción, la enumeración y el estilo. A menos que el informe sea corto, se inicia con un resumen ejecutivo, un índice, títulos y subtítulos para orientar al lector, evitar párrafos largos e insertar gráficas con sus pies y notas, siempre teniendo en cuenta que las citas y las referencias fuente son importantes. Se ha de considerar el uso de los medios masivos, cuando lo amerite el análisis. Generalmente esta historia suele ser el primer borrador de la política pública que se quiere diseñar.

Este ejercicio en particular del análisis, desde las misiones de profundización en junio pasado, hasta el inicio de la asistencia técnica a fines de noviembre e inicios de diciembre del año pasado, impide establecer una línea de tiempo auténtica donde los procesos críticos puedan ser reflejados en los mejores términos. Consideramos que aún es corto el

camino recorrido a pesar de los interesantes resultados alcanzados hasta el momento. Desde el inicio, un hito que puede ser citado, ha sido la voluntad política del Gobierno Colombiano y de sus instituciones desde la primera misión de profundización en junio del 2012, aún cuando en diciembre del mismo año se presentaron controversias con relación al liderazgo institucional de la actual política nacional de prevención en construcción.

En el mismo sentido, la celeridad de las coordinaciones para retomar el trabajo iniciado a fines del 2012, y empezar con buen pie en abril de este año, ha supuesto coordinaciones permanentes desde enero pasado a través de reuniones por Skype y conversaciones telefónicas. Éstas fueron de importante trascendencia para comprender y consensuar la metodología a seguir, y las decisiones políticas y técnicas que ellos debían de tomar. Finalmente, podemos indicar en un sentido prospectivo, que es crucial acoplar esta asistencia técnica al proceso metodológico del SIS-CONPES de la DNP, así como fortalecer el proceso de acompañamiento al país que desde el OIJ se viene dando a la acción.

Conclusiones

Colombia ha manifestado un claro compromiso político e institucional, así como ha iniciado una movilización de recursos humanos y técnicos, así como colocado importantes expectativas como consecuencia de la realización de la presente acción. Todos los actores que han sido parte de la consulta de *stakeholders* (grupos focales y entrevistas) en las dos metodologías seguidas a nivel nacional y local, tienen ahora un especial interés por los siguientes pasos a seguir en esta tarea y concretarla en el tiempo.

Durante la última misión de asistencia técnica se establecieron algunas responsabilidades y tareas como parte de las acciones a seguir para impulsar esta nueva política. La primera de ellas fue consolidar el liderazgo de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho en la conducción de esta política nacional de prevención, de manera que las coordinaciones futuras de asistencia técnica puedan dirigirse a esta instancia y cada vez menos al DNP, cuyo papel y contribución en este proceso ha sido determinante.

Asimismo, se ofrecieron algunas pautas de asesoría técnica sobre la generación de estructuras institucionales para el consenso-legitimidad, seguimiento y acompañamiento de esta nueva política a través de la formalización de la solicitud del CONPES de prevención de la delincuencia juvenil por parte del Ministerio de Justicia al DNP y asimismo, aproximarse de forma más destacada a los sectores de Educación y Salud.

Esta experiencia de desarrollo de una política nacional de prevención de la delincuencia juvenil resulta de especial interés para otros países de la región que afrontan la misma problemática y que aún contando con recursos extraordinarios, no han tenido un impacto destacable en la reducción de este problema. El caso de El Salvador y de otros países de la

región Centroamericana es un buen ejemplo de ello. Sin embargo, la propuesta de construcción de política que representa esta acción reportada en el presente estudio de caso, puede constituir, aún con todas sus limitaciones, una alternativa novedosa y efectiva para enfrentar desde un enfoque no represivo ni punitivo, el problema del delito juvenil.

El OIJJ considera que aún cuando se ha empleado un enfoque basado en resultados (evidencias y procesos secuenciales) para el diseño de una política pública en materia de delincuencia, es posible concebir este tipo de aproximación para otras políticas públicas en el resto de ejes del Programa. Un efecto central que genera este tipo de enfoques, es el legado de una nueva racionalidad de gestionar política pública, y de planificar, diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar sus resultados, por parte de las administraciones públicas.

Se recomienda fortalecer los procesos de acompañamiento y evaluación de la implementación de la política al país en la realización de esta acción, así como potenciar los aportes de forma sinérgica del resto de ejes que subsidiariamente pueden contribuir, incluso en el mismo país, con los resultados de esta política.